

37ª REUNION — 4ª SESION EXTRAORDINARIA — 11 DE FEBRERO DE 1987

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VICTOR HIPOLITO MARTINEZ**

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRON

SENADORES PRESENTES:

AMOEDO, Julio A.
BENITEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRAVO, Leopoldo
CARRIZO, Macario
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RUA, Fernando
DEL VILLAR, Manuel
FALSONE, José A.
GARCIA, Alfredo
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GIL, Francisco
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita

MARTIARENA, José H.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.
MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan C.
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
RUBEO, Luis
SAADI, Vicente L.
SALIM, Luis
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.

AUSENTES, CON AVISO:

BRITOS, Oraldo N.
FERIS, Gabriel
SANCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
VIDAL, Manuel D.

SUMARIO

I. Asuntos Entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 4671.)
- II. Mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos. (Pág. 4672.)
- III. Mensajes y decretos del Poder Ejecutivo por los que se amplía el temario de las sesiones extraordinarias. (Pág. 4672.)
- IV. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 4675.)
- V. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 4676.)
- VI. Comunicación de un señor senador. (Página 4679.)
- VII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 4679.)
- VIII. Peticiones particulares. (Pág. 4681.)
- IX. Proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se rechaza los fundamentos del veto de la ley 23.431 (Creación de la Comisión Nacional de Reforma y Actualización del Estatuto del Docente) (S.-898/86). (Pág. 4682.)
- X. Proyecto de ley del señor senador Velázquez por el que se incluye un nuevo capítulo en la Ley de Contabilidad y organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación (S.-900/86). (Pág. 4684.)
- XI. Proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita la inclusión en sesiones extraordinarias del proyecto de ley algodonera (S.-1/87) (Página 4686.)
- XII. Proyecto de ley del señor senador Rubio por el que se declara a la ciudad de Mar del Plata como capital de la República (S.-2/87). (Pág. 4687.)
- XIII. Proyecto de comunicación del señor senador García y otros señores senadores por el que se solicita la prórroga del beneficio de reembolso adicional a las exportaciones, establecido en el artículo 49 de la ley 23.018, hasta el 31 de diciembre de 1987 (S.-3/87). (Pág. 4687.)
- XIV. Proyecto de comunicación del señor senador Berhongeray por el que se solicita la declaración de interés nacional de la ruta provincial 28 de La Pampa (S.-4/87). (Página 4688.)
- XV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la pavimentación de la ruta nacional 151 en La Pampa (S.-5/87). (Pág. 4689.)

- XVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la restauración del ramal ferroviario San Luis-Bahía Blanca (S.-8/87). (Pág. 4690.)
- XVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la realización de obras de repavimentación en la ruta nacional 35 y de empalme con la ruta nacional 3 (S.-7/87) (Pág. 4690.)
- XVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la pavimentación de diversos tramos de la ruta nacional 143 y la realización de estudios para la construcción de una red de acueductos en Mendoza y en La Pampa (S.-8/87). (Pág. 4691.)
- XIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se declare de interés nacional la ruta nacional 10, se pavimenten otras rutas y se construyan acueductos en Mendoza y La Pampa (S.-9/87). (Pág. 4692.)
- XX. Proyecto de ley del señor senador Feris por el que se establece un régimen de igualdad de derechos y obligaciones para las entidades bancarias públicas y privadas (S.-10/87). (Pág. 4694.)
- XXI. Proyecto de declaración de los señores senadores Bravo y Gil por el que se manifiesta desagrado ante fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con una sentencia de la Cámara de Diputados de San Juan (S.-11/87). (Pág. 4694.)
- XXII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Molina y Murguía por el que se solicita la dotación de un aparato de hemodiálisis al Hospital Distrital de Caleta Olivia, Santa Cruz (S.-12/87). (Pág. 4696.)
- XXIII. Proyecto de resolución del señor senador León por el que se solicita la inclusión de las provincias del Chaco y de Formosa en el programa de recuperación para zonas inundadas, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (S.-13/87). (Pág. 4696.)
- XXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita se ponga en conocimiento del gobierno chileno el desagrado del gobierno argentino por la presencia de embarcaciones pesqueras de aquel país en aguas jurisdiccionales argentinas (S.-14/87). (Pág. 4697.)
- XXV. Proyecto de comunicación del señor senador Murguía por el que se solicita la modificación de la operatoria del sistema económico financiero, a través de la eliminación de las "mesas de dinero" clan-

destinas, control de las casas de cambio, bancos privados, etcétera (S.-15/87). (Página 4697)

XXVI. Proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita la construcción de un camino de acceso a la localidad de La Tigra, Chaco (S.-16/87). (Pág. 4698.)

XXVII. Proyecto de declaración de los señores senadores Bravo y Gil por el que se adhiere a la conmemoración del 12 aniversario de la iniciación del "Operativo Independencia" (S.-17/87). (Pág. 4698.)

2. Homenajes:

I. A la memoria del general Martín Miguel de Güemes. (Pág. 4699.)

II. A la memoria del doctor Carlos Alberto Alvarado. (Pág. 4701.)

III. A la memoria del doctor Plácido Enrique Noguera. (Pág. 4703.)

3. Moción de preferencia formulada por el señor senador Trilla para rendir homenaje en la próxima sesión a la memoria del doctor Julio César Saguier. Se aprueba. (Pág. 4705.)

4. Manifestaciones del señor senador Salim respecto a la visita del Papa a la Argentina. (Pág. 4706.)

5. A moción del señor senador Trilla se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en segunda revisión por el que se establece un régimen de normalización impositiva (P.E.-200/86). (Página 4706.)

6. A moción del señor senador Trilla se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión sobre prórroga de la vigencia de la disposición de facto 22.947 y sus modificaciones, de impuesto sobre los débitos en cuenta corriente de entidades financieras (C.D.-1/87). (Pág. 4715.)

7. A moción del señor senador Trilla se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la vigencia de los gravámenes establecidos por la norma de facto 22.916, sobre los intereses y ajustes de los depósitos a plazo fijo en moneda nacional o extranjera (C.D.-2/87). (Pág. 4716.)

8. A pedido del señor senador Bravo se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el proyecto de declaración del que es autor junto con el señor senador Gil por el que se expresa desagrado ante dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación con una sentencia de la Cámara de Diputados de San Juan (S.-11/87). Se aprueba. (Página 4722.)

9. A moción del señor senador León se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución

del que es autor por el que se solicita la inclusión de las provincias del Chaco y de Formosa en el programa de recuperación de largo plazo con el apoyo crediticio del Banco Interamericano de Desarrollo para zonas inundadas (S.-13/87). (Página 4723.)

10. A pedido del señor senador Murguía se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Economía para el proyecto de comunicación del que es autor por el que solicita la modificación de la operatoria del sistema económico financiero y la inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias de una nueva ley de entidades financieras (S.-15/87). (Pág. 4724.)

11. A pedido del señor senador Bravo se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Interior y Justicia para el proyecto de declaración del que es autor junto con el señor senador Gil por el que se expresa adhesión del Senado al XII Aniversario de la Iniciación del Operativo Independencia (S.-17/87). (Pág. 4724.)

12. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se promueve al grado inmediato superior al señor vicealmirante don Ramón Antonio Arosa, al señor brigadier mayor don Ernesto Horacio Crespo y al señor general de división don Héctor Luis Ríos Ereñú (P.E. 469/86; P.E. 470/86 y P.E. 468/86). Se aprueba. (Página 4724.)

13. Manifestaciones de los señores senadores de la Rúa y Martirena respecto al proyecto de ley de protección al aborigen. (Pág. 4733.)

14. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4733.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 49 del miércoles 11 de febrero de 1987.

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 18 de diciembre de 1986 por el que se prorrogan por el plazo de 90 días a partir del 11 de diciembre, las designaciones de los señores senadores con funciones en las comisiones permanentes y en la Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración y la Administradora de la Biblioteca del Congreso (D.P. 1008/86). (A sus antecedentes.)

- e) Las cooperadoras escolares reconocidas por autoridad competente;
- f) Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislación vigente;
- g) Las asociaciones gremiales de trabajadores;
- h) Las obras y servicios sociales que funcionen bajo el régimen de la ley 22.269, las de provincias y las previstas en la ley 17.268;
- i) Los partidos políticos legalmente constituidos;
- j) Los inmuebles declarados monumentos históricos según la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos;
- k) Los inmuebles exentos de las contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza; territorial y de pavimentos y aceras que prevé la ordenanza fiscal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pertenecientes a jubilados y pensionados.

Art. 10. — Facúltase a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a extender el ámbito de exenciones a las que previera la ordenanza fiscal.

Art. 11. — Los tributos establecidos en los incisos b), c) y d) del artículo 2º se regirán por las normas pertinentes de la ordenanza fiscal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con las modalidades impuestas por la presente ley.

Art. 12. — La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires depositará los importes que perciba en cumplimiento de lo dispuesto por esta ley en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cuenta especial que se denominará "Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de Subterráneos". Asimismo deberán depositarse en la cuenta mencionada los demás recursos enunciados en el artículo 2º de la presente ley.

Art. 13. — El fondo permanente será administrado por Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado y destinado exclusivamente a los fines previstos en el artículo 1º de la presente ley.

La aplicación de dicho fondo será fiscalizada por una comisión honoraria compuesta por siete miembros del Concejo Deliberante y tres representantes del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, quienes deberán elevar un informe anual al Concejo Deliberante y tomar intervención en los informes previstos por el artículo 3º de la presente ley.

Para el cumplimiento de su función la comisión tendrá las atribuciones que la ley 19.550 concede a la sindicatura de las sociedades anónimas. Esta comisión será honoraria y su gestión no dará lugar a la percepción de importe alguno cualquiera sea su denominación.

Art. 14. — Decláranse de interés nacional las inversiones, obras, adquisiciones, construcciones y servicios realizados con el Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de Subterráneos, que se crea por la presente ley.

Art. 15. — Derógase la ley 17.510 y toda disposición legal en cuanto se oponga a la presente ley.

Art. 16. — Incorpórase como inciso y) del artículo 106 de la ley 19.987 y sus modificaciones el siguiente:

- y) La contribución de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien determinadas zonas.

Art. 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sra. Gurdulich de Correa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Solicito que este proyecto sea girado también a la Comisión de Obras Públicas, que incluso debería ser la comisión cabeza del tema.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Como hay asentimiento, el proyecto de ley pasará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también a la de Obras Públicas.

Continúa la lectura de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

4

Régimen de normalización impositiva. - Proyecto de ley en segunda revisión (C.D. 200/86).

Buenos Aires, 4 de febrero de 1987.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, las modificaciones introducidas en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el que se establece un régimen de normalización impositiva y ha tenido a bien aceptar en forma total las introducidas en los artículos 4º, 8º, 11, 28, 32, 37, 48 y 50; aceptar parcialmente las modificaciones a los artículos 29, 38 y 54; y desechar las introducidas a los artículos 2º, 31, 41, 42, 44, 53, 56 y el agregado del capítulo V, en un todo de acuerdo con lo que se establece a continuación:

1. Aceptación total:

Artículo 4º (punto 2 de la sanción del Honorable Senado).

Artículo 8º (punto 3 de la sanción del Honorable Senado).

Artículo 11 (punto 4 de la sanción del Honorable Senado).

4

MANIFESTACIONES

Sr. Salim. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Salim. — Solicito que ante la inminencia de la visita del Santo Padre a la Argentina este Honorable Senado de la Nación por intermedio de la Presidencia gestione ante el Episcopado argentino, el señor arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y la Comisión de Recepción y Homenaje, que tan ilustre visitante concurra al Congreso de la Nación.

Sr. Presidente. — La Presidencia desea informar que realizó esa gestión hace aproximadamente noventa días. Pero se nos hizo saber que como Su Santidad no viene en calidad de jefe de Estado, aunque reviste ese carácter, sino en misión pastoral, y dado que en otros países no había asistido a asambleas en el Parlamento, se entendía que no era posible acceder a lo solicitado.

No obstante ello, haremos las gestiones pertinentes ante la Cancillería.

5

REGIMEN DE NORMALIZACION IMPOSITIVA

Sr. Presidente. — Corresponde considerar los asuntos reservados. En primer lugar, el proyecto de ley en segunda revisión por el que se establece un régimen de normalización impositiva.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: el año pasado tratamos intensamente este tema en este recinto, el que ahora vuelve en segunda revisión proveniente de la Cámara de Diputados. En razón de esas circunstancias específicas, se acordó en la reunión de presidentes de bloque que este tema iba a ser tratado sobre tablas en esta reunión.

Por lo expuesto, mociono para que el tema relativo al régimen de regularización impositiva, comúnmente denominado "blanqueo", se trate sobre tablas.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por la Capital.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

—Se lee nuevamente el proyecto de ley que figura en el punto V/4 de los asuntos entrados.

Sr. Presidente. — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor Presidente: desearé dejar señalado que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este honorable cuerpo se trató con anterioridad este tema con la intervención de sus integrantes más otros señores senadores que se habían interesado en el asunto, y fundamentalmente los presidentes de bloque, y se hizo un estudio pormenorizado.

Por esa razón, cuando se contó con la sanción de la Cámara de Diputados el 29 de octubre del año pasado pudimos tratar sobre tablas este asunto sin inconvenientes y con la anuencia de los señores presidentes de bloque, porque el tema había sido perfectamente analizado con anterioridad y habíamos previsto las reformas que a los distintos señores senadores les pareció oportuno o importante realizar en esta materia.

Fundamentalmente, los señores senadores insistieron en la inclusión de una disposición clara y definida que permitiera la coparticipación directa de las provincias en la recaudación de este nuevo impuesto, por cuanto el mismo significaba la regularización de situaciones anteriores con respecto a impuestos tales como a las ganancias, a los capitales, a los patrimonios, al valor agregado, todos ellos coparticipables.

Debemos tener en cuenta que hasta 1984 estuvo en vigencia la ley 20.221, de coparticipación federal, que establecía con justo derecho una coparticipación directa de las provincias en base a los montos recaudados, y a su vez esa disposición indicaba la automaticidad del reparto a las tesorerías provinciales en razón de las alícuotas establecidas para ellas y el Tesoro nacional.

Este fue el aspecto fundamental que se tuvo en cuenta. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado sostuvo este criterio y trató que en Diputados se lo mantuviera sin ninguna modificación, dado que se trata de un tema de vital importancia para los intereses que con todo rigor y dignidad tratan de defender siempre para sus respectivas provincias los señores senadores. Debo expresar sobre este particular, y en defensa de la economía federal, que la Cámara de Diputados reconoció la legitimidad y el acierto de la modificación propuesta durante el tratamiento de este tema en el Senado. En

consecuencia, la sanción de la Cámara de Diputados que viene en revisión está redactada tal como oportunamente lo había propuesto la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Senado y en su respectiva sanción, que como he expresado contó con la anuencia de los señores senadores.

Enfatizo sobre este aspecto porque en la revisión que efectuó la Cámara de Diputados aceptó ciertas modificaciones en su totalidad, algunas parcialmente y otras fueron rechazadas. Entre las que fueron aceptadas en su totalidad se encuentra la modificación que habíamos propuesto a las alícuotas de la escala del impuesto especial que fija esta ley, las que fueron rebajadas en su categorización, por entender que siendo menores las escalas podría ser mayor el número de los contribuyentes que se encuadrara en esta regularización.

Esta idea generalizada de los señores senadores fue aceptada como consecuencia de tratarse de una propuesta razonable.

También fueron aceptadas una serie de modificaciones de orden técnico que se habían introducido como consecuencia de algunas malas interpretaciones legislativas y aspectos que hacían a algunas cuestiones de equidad.

El tema que fue rechazado por parte de la Cámara de Diputados, contraria a la aceptación de algunos otros aspectos que morigeraban este impuesto, es el capítulo de la inversión inducida, por el cual según fueran las áreas de la producción a la que fueran destinados los capitales "blanqueados", éstos tendrían una reducción del 50 por ciento de la escala establecida en el artículo respectivo.

Conversamos detalladamente respecto de este tema con señores diputados de las dos bancadas mayoritarias y consideramos suficientemente importante el establecimiento de una escala menor. Debo señalar que existen resortes suficientes en la estructura de la legislación que hoy vamos a votar para que se legalicen ciertos capitales, lo que contribuirá a la dinámica económica del país.

Por otra parte, fueron rechazados algunos aspectos en los que debo reconocer nos equivocamos en el ordenamiento anterior, fundamentalmente, en dos o tres ajustes que se efectuaron en este propio recinto a los que me opuse como presidente de la comisión, pero que las circunstancias del momento hicieron que se aprobaran, y que adolecían de un defecto de compaginación en este conflictivo tema. Debo recordar que en las leyes impositivas se maneja una estructura de definición y de referencias

de una ley a otra, motivo por el cual temas de esta naturaleza no pueden considerarse siempre sobre tablas.

En general entiendo que las modificaciones introducidas fueron necesarias y deben ser aceptadas. Además, tenemos la satisfacción fundamental de que muchas fueron realizadas con fundamento en el tema de la coparticipación federal.

Nuestra bancada considera que debe ser aprobada en general la sanción de la Cámara de Diputados con las modificaciones propuestas, para que luego de su promulgación pueda tener vigencia dentro del sistema impositivo del país. Así podrán utilizarse rápidamente los fondos que piensan recaudarse.

A título informativo, señalo que la Secretaría de Hacienda estima como probable una recaudación de mil millones de australes, de los cuales —de acuerdo con los términos de la ley— aproximadamente 500 millones deberán corresponder al Tesoro nacional y los restantes 500 millones para los tesoros provinciales, según los porcentajes establecidos en el acuerdo de distribución.

Señalo que estos montos se encuentran preconsiderados en el proyecto de presupuesto de la Nación, que espera el tratamiento de estas leyes para ser presentado en este Congreso de la Nación en la segunda quincena de febrero.

De esta forma adelanto el apoyo de nuestra bancada al texto enviado por la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente, cuando se trató anteriormente el proyecto en este recinto, participé con la mayoría de los representantes de los distintos bloques en la aprobación de las reformas que mejoraban el texto originalmente enviado al Senado; por ejemplo, la coparticipación de la mitad del impuesto para las provincias, la rebaja de algunas alícuotas para favorecer y beneficiar a un mayor número de contribuyentes.

Pero, como había adelantado en la reunión de presidentes de bloque, no he votado afirmativamente la preferencia ni el tratamiento sobre tablas de este asunto y voy a dar mi voto negativo a este proyecto de ley así como a cualquier otro de carácter impositivo que trate este Senado hasta tanto no se acuerde la aprobación de un régimen más justo de coparticipación federal de impuestos.

Asumo esta postura por cuanto considero que la situación que viven las provincias hoy día es de marcada injusticia y postergación, quedando

afectada incluso la vigencia plena del sistema institucional de nuestra Constitución, por carecer ellas de los recursos necesarios para ejercer las facultades que les reserva la propia Constitución.

Al hablar de esta manera en este recinto creo estar haciéndolo con autoridad, pues he dado mi voto afirmativo a iniciativas del Poder Ejecutivo que significaban la defensa del interés general y otras que hacían a la mejor marcha del gobierno, afrontando por ello incluso críticas dentro de mi propio partido.

En 1985 di mi voto favorable a la aprobación del proyecto de presupuesto, a pesar de discrepar con muchas de sus disposiciones. Antes de hacerlo pedí que compareciera ante este Senado el propio secretario de Hacienda de la Nación a los efectos de tener el compromiso de que con el presupuesto para 1986 se remitiera el proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos que reclamábamos.

En febrero del año pasado, junto con el proyecto de presupuesto para 1986 ingresó el de coparticipación de impuestos. Al primero se le dio impulso. Al de coparticipación se lo guardó en un cajón.

Hoy, en el comienzo de 1987, año político por excelencia, los gobernadores de provincia de todos los signos —incluso creo que también alguno radical— andan mendigando por los pasillos de la Secretaría de Hacienda en busca de los recursos que les son propios, distrayendo tiempo y energías en vez de consagrarlos a atender los difíciles problemas de sus provincias.

Por esa circunstancia, en defensa de nuestra Constitución y del federalismo que predicamos todos, quiero adelantar que votaré en contra de este proyecto, y de cualquier otro de índole impositiva, hasta tanto no acordemos la aprobación de un régimen más justo de coparticipación federal de impuestos, que reconozca los derechos de las provincias, ayude a hacer justicia con el postergado interior y a que volvamos a hacer patria con esos sectores olvidados de la República que están necesitando del apoyo público y del estímulo al trabajo para radicar a sus hijos allí.

Por toda esta fundamentación adelanto mi voto negativo al proyecto en consideración de la Cámara.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Murguía.— Señor presidente: el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda acaba de presentar a esta Cámara el proyecto conocido como de blanqueo, que hoy tratamos en segunda revisión.

Cuando abordamos por primera vez el tratamiento de esta iniciativa puedo decir que teníamos un sentimiento ambiguo. No nos gustaba la idea de condonar las deudas que los evasores del fisco tienen con la sociedad. Pero interpretábamos que eran atendibles las razones que habían llevado al partido gobernante a renunciar a principios que habían sostenido con toda energía, incluso contra nosotros mismos cuando éramos gobierno.

Considerábamos que estaba en primer lugar la realidad de una economía en negro, como el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados acaba de denunciarlo. En efecto, dos tercios de la economía argentina están operando en esas condiciones.

Además, estaba la posibilidad de que con esta ley incorporáramos capitales al circuito productivo y que las tasas que cobraríamos a los evasores ayudarían a las provincias por medio de la coparticipación federal.

Coincidimos plenamente con el bloque del oficialismo cuando propuso en comisión incorporar al proyecto los lineamientos contenidos en otro proyecto de blanqueo —que había sido presentado en esta Honorable Cámara por el señor senador Gómez Centurión— por el cual se establecía una rebaja en las tasas de todos los evasores que, al blanquear, lo hicieran destinando los fondos exteriorizados a la actividad productiva y a la compra de títulos públicos.

En los debates de la comisión respectiva propusimos algunas pequeñas mejoras a esta idea central que terminó siendo el capítulo quinto, y ya en la sesión aprobamos el proyecto por unanimidad.

Señor presidente: al votar todos juntos, después de haber debatido y llegado a acuerdos y sabiendo, además, que estábamos favoreciendo a las provincias y promoviendo la utilización productiva de esos fondos blanqueados, sentí una gran emoción. Y ésta fue aún más grande al saber que desde otras áreas del gobierno se resistía de manera muy especial al capítulo quinto. Desde esas áreas se aceptaba —creo que de muy mala gana— otra modificación que aquí introdujimos: el destino inmediato de la mitad del producido del blanqueo a los fondos de coparticipación.

Es que a ningún argentino se le escapa, señor presidente, que la conducción económica tiene dos preocupaciones centrales: mantener baja la inflación y alta la recaudación, para negociar con el Fondo Monetario Internacional. De allí que a esa conducción no le gustara la idea de que se rebajaran las tasas, y esto sin importarle

cuál fuera la razón para bajarlas —esto es, la inversión productiva.

De allí nuestra emoción al comprobar que en el seno del partido gobernante había dos razones contrapuestas que lo llevaban a renunciar a un tradicional principio de ese partido. Mientras un sector pensaba que había que recaudar a toda costa para tener un mayor margen de negociación con los acreedores internacionales, otro sector —el de los legisladores— comprendía que es prioritario reactivar la economía y que esta razón sí justifica abandonar el principio de no blanquear.

Bien, señor presidente: introdujimos en este Honorable Senado veinte modificaciones al proyecto que habíamos recibido de Diputados. Algunas fueron menores y estas dos a las que estoy haciendo referencia, fundamentales. Voy a recordarlas: el envío inmediato del 50 por ciento de lo recaudado con destino a las provincias y las rebajas del 50 por ciento de las tasas para quienes destinaran los capitales blanqueados a la inversión productiva y en valores públicos.

Estos cambios obligaron a una segunda discusión en Diputados. Allí el bloque mayoritario —oficialista— no tuvo más remedio que aceptar el destino de los fondos a coparticipación, pero no aceptó el capítulo quinto. El bloque de diputados justicialista, en cambio, defendió brillantemente y con ardor nacional la postura de que se mantuvieran las modificaciones que aquí habíamos introducido. A la vez, propuso mejoras técnicas, algunas de las cuales fueron aceptadas por el propio oficialismo.

Hoy, en esta sesión, tenemos ante nosotros una amarga comprobación. Para que este Honorable Senado pueda insistir ante los señores diputados, tenemos que reunir los dos tercios del cuerpo. Si votáramos por unanimidad —como lo hicimos la primera vez que tratamos este proyecto— tendríamos un gran triunfo nacional, porque al inducir a los tenedores de fondos negros a invertir y sacar esos fondos del circuito especulativo de las mesas clandestinas de dinero o de los activos en moneda extranjera, por la vía de una rebaja en las tasas, seguramente el Tesoro nacional y las propias provincias estarían recibiendo menores fondos del blanqueo pero obtendríamos todos —las provincias y el país en su conjunto— el beneficio de una economía en crecimiento.

Si votamos en este día por unanimidad, señor presidente, estaremos haciéndolo con un sentido positivo, con una visión hacia adelante del país. Si insistiéramos, señor presidente, por unanimi-

dad, repitiendo nuestra primera votación, estaríamos dando al pueblo argentino un ejemplo difícil de olvidar, como sería demostrar que por sobre las diferencias partidarias nos une en el momento de decidir la voluntad de trabajar por el bienestar del pueblo, por su progreso y por la creación de fuentes de trabajo.

En ese aspecto quiero ahora adelantar el voto de mi bloque, que será en el sentido de insistir en la sanción anterior del Senado.

Pero a través del miembro informante del oficialismo nos hemos enterado de cuál será el voto de ese bloque; consistirá en dar marcha atrás en sus ideas. Ello implicará sancionar una ley de blanqueo cuya finalidad principal es acercar fondos al Tesoro, lo que significa lograr el cierre de las cuentas fiscales a gusto de los acreedores; peor aún, señor presidente: a gusto de los poderes internacionales a los que no interesa nuestro crecimiento como país independiente, sino nuestra dependencia cada vez mayor.

Estoy convencido —y me atrevo a arriesgar la opinión— de que el bloque de senadores del oficialismo no se retractará con gusto ni con alegría de lo que ya votó, de lo que él mismo propuso.

Estoy seguro de que al votar en contra de su propia propuesta estará actuando contra su conciencia, contra su conciencia nacional.

Por ello, antes de finalizar estas palabras con una reflexión final, deseo invitar a los señores senadores del oficialismo y de los restantes bloques a insistir en la primera votación unánime. Voy a subrayar a los señores colegas de bancada que están ante la disyuntiva de votar a favor del pueblo argentino —por un país en crecimiento—, o de votar en contra de esta idea, que si se deciden por esto elegirán un lindo maquillaje para el presupuesto nacional, cuya única finalidad será seguir renegociando la deuda externa, aumentándola en consecuencia, sin crear siquiera a través del fomento de la inversión las condiciones para pagarla.

La última reflexión, señor presidente, está centrada en hacer notar que si el bloque de la mayoría se desdice de su primera votación y acata las órdenes superiores que así se lo indican, se estará rompiendo en los hechos con la división de poderes que caracteriza a nuestro sistema. Estaremos poniendo al Poder Legislativo a las órdenes del área económica.

Mi bloque, señor presidente, insistirá en la votación original y unánime de este cuerpo. La última batalla que daré me impulsa a pedir a

los colegas que sostengan lo que ya votaron en la seguridad de que es lo mejor para el país.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: el proyecto de ley de regularización impositiva, conocido como "blanqueo", ha sido presentado por el Poder Ejecutivo, como resultado de la lógica necesidad de reordenar la situación impositiva luego de las severas distorsiones ocurridas bajo el gobierno de facto.

Respecto de las distorsiones producidas en el período indicado, teniendo en cuenta los otros blanqueos anteriores merece ponerse de manifiesto, como gran diferencia, que la mayoría de los activos negros o no declarados se originaron en una época recesiva en la que se fomentaba la especulación y no la producción. Y una segunda característica diferenciadora es que esos activos no eran, como en otras oportunidades, bienes de producción radicados en el país sino activos financieros, generalmente colocados en el exterior, con lo cual la posibilidad de realizar investigaciones se torna más difícil.

Según informaciones de instituciones internacionales de crédito, gran parte de la deuda externa argentina habría financiado el crecimiento de activos de argentinos en el exterior.

Esto le confiere una característica especial a la ley de blanqueo: por un lado arrimaría fondos al Tesoro; pero, por otro lado, debería buscarse la forma de atraer esos fondos hacia la inversión productiva en el país.

Por otra parte, se plantea que el blanqueo debe visualizarse como parte integrante de una reforma impositiva más profunda. Es cierto que en los dos últimos años —1985 y 1986— se aprobaron algunas leyes tendientes a esta solución, pero tal vez no se avanzó mucho en una administración más eficiente de esos tributos por parte de la Dirección General Impositiva.

Con respecto a la administración de la recaudación de los impuestos, hay que analizar las falencias que presenta el sistema tributario argentino. En primer lugar, hay que mencionar el altísimo nivel de evasión, que no tiene precedentes, de los impuestos a las ganancias, al capital y al valor agregado, respecto de los cuales sólo el 13 por ciento de los contribuyentes inscriptos abonan dichos tributos.

En segundo término, hay que hacer referencia a la excesiva concentración de la recaudación impositiva en pocos contribuyentes. Esto provoca sistemas inicuos y estructura un ordenamiento impositivo fuertemente regresivo al hacer recaer básicamente en los impuestos indi-

rectos la mayor parte de las cargas, debiendo hacerse frente a ellas sin que se mida el volumen patrimonial ni las posibilidades económicas de los contribuyentes afectando a los más necesitados. Es de hacer notar que del total recaudado ha crecido notablemente la participación de los impuestos indirectos, circunstancia que configura un aspecto regresivo del actual sistema.

Por otra parte, las falencias en la recaudación se verifican a pesar de que existe un régimen tributario que, desde el punto de vista teórico, recoge las modernas concepciones en la materia. En consecuencia, habría que concluir que existe una gran diferencia entre la teoría y la práctica impositiva que se observa en nuestro país. Este desequilibrio obedece más a problemas estructurales de la economía argentina que a cuestiones vinculadas específicamente con el aspecto fiscal.

Es indudable que se está empeñado mucho más en lograr dominar el proceso inflacionario que en superar los desequilibrios estructurales y generar un marco de expansión en la producción y en la acumulación de capital. Además, se le ha dado prioridad a la estabilización de los precios privilegiando el ajuste en los campos fiscal, monetario y salarial. Estos objetivos no pueden, por cierto, crear condiciones adecuadas para relanzar la producción en el país y, por lo tanto, no es posible garantizar un futuro ordenamiento impositivo equitativo, progresivo y sin evasión, que debería ser el fundamento esencial de la decisión que estamos tomando.

En definitiva, este blanqueo impositivo sólo persigue objetivos fiscalistas y no creo que contribuya a concretar las reformas estructurales que la economía requiere para terminar con la especulación, que en la actualidad inhibe el desarrollo económico.

Este proyecto sugiere, además, que la economía negra o subterránea, más allá de las diferencias que puedan existir acerca de su verdadera magnitud, no resultaría conjurada por esta legislación en la medida en que no se aseguren los mecanismos de aliento a la inversión y a la producción y, con ello, mejores posibilidades de rentabilidad empresarial en condiciones transparentes y equitativas.

Lamentamos el rechazo por parte de la Cámara de Diputados del capítulo V del proyecto, que llevaba por título "Exteriorización de capitales con destino a la reactivación del aparato productivo nacional". Creemos que el mismo era fundamental para el equilibrio y la eficacia de la norma, ya que no sólo iba a arrimar recursos sino que podía traer un volumen mayor de ellos

al blanqueo, pero destinados a estimular la producción.

Creemos en el argumento de que una tasa menor en el costo del blanqueo iba a significar una menor recaudación, pero iba a ser compensada con un mayor volumen de presentaciones.

Otro punto tal vez lamentable es el del artículo 50, referido a la coparticipación de los fondos recaudados en el blanqueo. Si bien lo que el Senado aprobó igualmente mejoró la posición inicial del Poder Ejecutivo con respecto a dicha coparticipación, creemos que se pierde la simetría y que se introduce una forma de desequilibrio al distribuir únicamente el 97 por ciento entre la Nación y las provincias y hacer participar a las provincias en el 3 por ciento de los fondos para la Dirección General Impositiva. Ya que las provincias son socias únicamente en los gastos de la Dirección y no en el manejo de ese ente burocrático e ineficiente. Lo justo hubiera sido coparticipar, mitad para la Nación y mitad para las provincias, el ciento por ciento de lo recaudado, y que la Nación destinara los fondos que considerase pertinentes para la DGI, dentro de su 50 por ciento como ente nacional que éste es.

Más allá de los aspectos señalados, las modificaciones introducidas por esta Cámara fueron acordadas en su oportunidad entre los distintos bloques para subsanar los defectos del texto original. Por lo tanto, no podemos ahora desdecirnos y aceptar como correcto lo que antes entendimos erróneo e irregular en la mayoría de los casos.

Las modificaciones que introdujo este Senado tendían a otorgar al proyecto, en lo que era posible, el sentido que debe asignarse a una norma de esta naturaleza, es decir, señalar un nuevo punto de partida en el funcionamiento del sistema tributario en un contexto de orden e incentivo para la incorporación de los ciudadanos a la tarea de reconstrucción y crecimiento. Ciertamente, el texto original no facilitaba la tarea, pero, aun en forma parcial, el propósito se cumplía con el despacho mayoritario que este cuerpo aprobó el 30 de octubre último. No podemos caer en la incoherencia de aceptar el texto que ahora viene a nuestra consideración, sin haberse aportado elementos de juicio que nos persuadan de que esta Honorable Cámara se había equivocado.

Por lo expuesto anticipo mi voto por la insistencia en la sanción oportunamente aprobada por este cuerpo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: quise escuchar las opiniones de los distintos señores senadores para poder responder a las inquietudes presentadas.

En primer lugar, el señor senador Leconte defendió con ardor y con sentido netamente federalista distintos aspectos de los intereses económicos y financieros del sistema federal argentino, más allá de los de su provincia natal.

En tal sentido, deseo aclarar que el dictado de estas leyes que trataremos hoy permite de alguna manera recaudar fondos para administrar la pobreza que realmente tiene el país; todos debemos reconocer la existencia de dificultades económicas y financieras. Tenemos por delante nuestra propia administración actual hasta 1989 para dar solución a estas enormes dificultades. Ojalá tengamos aciertos suficientes como para que en el próximo período presidencial se encuentre al país asentado en otros niveles y se puedan administrar con mayor holgura los intereses generales de la Nación.

Se calcula que con la sanción de la ley de regularización impositiva es factible recaudar mil millones de australes, que deben distribuirse conforme a su propia estructura prácticamente en un 50 por ciento para la Nación y otro tanto para las provincias, salvando el 3 por ciento que enfatizaba el señor senador por Salta, doctor Romero, para la Dirección General Impositiva. Desde luego, dicha Dirección, así como todos los organismos nacionales, no está dedicada sólo a la Nación sino al total de la administración de los intereses del país. De tal forma que el manejo de esa distribución tiene asimismo un sentido de racionalidad que permitirá, digamos así, administrar de alguna manera los pocos bienes y fondos que deberán ser incluidos en el próximo presupuesto de la Nación, y por cierto también la capacidad del Tesoro nacional para aportar y alimentar los tesoros provinciales.

Por ejemplo, el otro proyecto de ley que trataremos hoy corresponde a fondos destinados a paliar las consecuencias de las inundaciones en el litoral, incluso en la provincia de Corrientes. No me parece propio no votarla por esta circunstancia cuando se trata de fondos específicos para un determinado aspecto. Y en esta ley de blanqueo hay fondos específicos para todas las provincias.

Quiero destacar que me parecen importantes las observaciones recibidas en la última reunión de presidentes de bloque; cuando se indicó que el proyecto de ley de coparticipación federal presentado por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias del año pasado todavía no fue considerado en la Cámara de Diputados.

Personalmente, con la anuencia de mi bloque, hice las correspondientes observaciones en nivel superior del Poder Ejecutivo a los efectos de que se tenga en cuenta esa particularidad, invitándolo a estudiar la posibilidad de que ese tema sea incorporado entre los que se tratarán en las sesiones extraordinarias de este año. De esta forma se aceleraría su tratamiento, en lo cual este bloque está sumamente interesado ya que de esta forma destrabáramos un inconveniente lógico, y diría hasta emocional, que se nos presenta.

Y digo emocional porque desde un punto de vista pragmático y netamente matemático, al ser considerado el presupuesto de 1986 —desgraciadamente por el mes de septiembre como consecuencia de las demoras sufridas fundamentalmente en la Cámara de Diputados— efectuamos el análisis de los aportes a los tesoros provinciales por parte del gobierno de la Nación. De acuerdo con las estadísticas que explicamos e incorporamos en el Diario de Sesiones, superaban el 62 por ciento de los impuestos que se coparticipan o son coparticipables según la legislación vigente.

Quiero decir aquí, en el recinto mayor del federalismo argentino, que el gobierno de la Nación tiene sumo interés en que se defina la ley de coparticipación federal con el objeto de que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se especifiquen los porcentajes que deben recibir el Tesoro nacional y las distintas provincias a efectos de dar por definitivamente terminado este tema, por lo menos durante el tiempo de vigencia de esta ley.

Me parece importante hacer este comentario porque se trata de una inquietud generalizada no sólo de los señores senadores, que siempre recurren a este tema como consecuencia de las necesidades propias de los tesoros provinciales, sino también del gobierno nacional.

Por otro lado, señor presidente, quiero expresar que he escuchado minuciosamente y con mucha atención lo manifestado por el señor senador Murguía con referencia al tratamiento de este proyecto de ley en especial. Y quiero recordar —como lo hice al inicio de la consideración de este asunto— que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto con otros señores senadores analizaron este tema, siendo consideradas las circunstancias del caso y las propuestas realizadas. Entre estas últimas podemos mencionar un proyecto presentado por el señor Gómez Centurión referido a la incorporación de capitales provenientes del exterior. No fue aceptada exactamente esa iniciativa pero sí algunas variantes que indicaban que si los mon-

tos blanqueados o regularizados impositivamente eran destinados a la reactivación en algunas áreas específicas de la economía, podrían abonar sólo el 50 por ciento de las escalas previstas en el proyecto de ley.

El motivo fundamental por el cual no se aceptó en la Cámara de Diputados este temperamento fue que se aprobó por unanimidad el artículo que se refería a las escalas y alícuotas correspondientes, en el que ya se había introducido una rebaja del 40 por ciento —es decir que quedaba vigente el 60 por ciento— con respecto a las escalas propuestas por el Poder Ejecutivo en su mensaje y proyecto de ley a propuesta del Ministerio de Economía.

En la consideración de la Cámara de Diputados se entendió que la rebaja introducida en las escalas era suficientemente atendible como para atraer los capitales del exterior o los capitales "negros" que circulan en el área financiera marginal de la República, y de esa manera poder hacerlos participar en la reactivación de la economía.

Esta modificación que comentamos no quiere significar de ninguna manera que dejemos de lado el proceso de reactivación económica de las distintas áreas oportunamente indicadas porque los contribuyentes que deseen "blanquear" o regularizar sus patrimonios puedan hacerlo con las escalas disminuidas que fueron propuestas por el Honorable Senado, discutidas luego por la Cámara de Diputados y que están aquí para su aprobación definitiva.

Debemos tener en cuenta que las escalas han disminuido prácticamente un 40 por ciento con respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo. De tal manera que aquellos ciudadanos que deseen regularizar su patrimonio y colocarlo en la producción en cualquiera de las áreas de la economía argentina pueden perfectamente hacerlo siguiendo las indicaciones del proyecto de ley en consideración.

No nos contradecimos de ninguna manera porque casualmente en su esencia este proyecto de ley —es cierto, no lo podemos negar— tiene aspectos fiscales destinados a alimentar las arcas del Tesoro y poder sostener y solventar el presupuesto que, en poco tiempo más, será enviado a este Congreso para su tratamiento. De algún lado, vertiente o área, será necesario transferir fondos al sector público para poder cubrir dicho presupuesto.

Estoy absolutamente convencido de que cuando sea tratado —como sucedió en 1984, 1985 y 1986— seguramente, y con justicia, los distintos bloques que integran este Parlamento indicarán falencias en una u otra área y recu-

rirán a la posibilidad de aumentar los porcentajes de inversión en los distintos sectores. Pero fatalmente esas mayores inversiones tienen que surgir de los impuestos capaces de cubrir los déficit que provocarán esos mayores costos o inversiones en la administración nacional, en los aportes a las provincias y en los aportes a las empresas públicas.

Todo es producto de una gran ecuación. Si uno de los miembros se eleva, el otro deberá sufrir un factor de variación en el mismo porcentaje.

Quiero que quede aclarada definitivamente una situación que muchas veces ya se señaló en este recinto. A partir de junio de 1985, más allá de los errores, defectos, falencias o de incumplimientos en su totalidad de las aspiraciones propias del llamado Plan Austral, nunca hemos cubierto déficit del presupuesto nacional dándole vueltas a la manija de la máquina de imprimir billetes sin respaldo, como ocurrió durante los cuarenta años anteriores a nuestro gobierno. Esto, reitero, debe quedar totalmente aclarado. Si hubiésemos impreso un solo austral sin respaldo, habríamos sufrido catastróficas consecuencias, como sucedió en los períodos anteriores.

De manera que si hemos cometido algunos errores en aspectos fundamentales relacionados con el delineamiento de la economía nacional, paulatinamente iremos consolidándonos más allá de los desfases que puedan producirse, como en enero de este año con los índices de inflación.

En síntesis, la ley de blanqueo sirve para la reactivación de la economía. Es una ley fiscal para recaudar fondos que no serán destinados al Poder Ejecutivo sino que servirán parcialmente para cubrir el presupuesto que trataremos próximamente en este mismo recinto y para alimentar los tesoros provinciales en la forma establecida por el artículo 50 de este proyecto.

Y sirve para la reactivación de toda la economía porque todo ciudadano honesto que quiera volcarse definitivamente a favor de los intereses del país, y que por distintas razones derivadas de las situaciones políticas y económicas acaecidas durante estos últimos diez años —que infinidad de veces fueron manifestadas en este recinto— no ha procedido así, podrá hacerlo. El ciudadano común, el hombre argentino que por alguna razón durante la época pasada tuvo que ocultar uno de sus patrimonios, de acuerdo con los porcentajes y alícuotas respectivos que fueron rebajados en un 40 por ciento respecto del proyecto original, ya no tendrá

que proceder así. Este es el mensaje que queremos darle desde nuestra bancada.

En conclusión, ese hombre debe concurrir definitivamente con todos sus bienes en beneficio general del país, contribuyendo así en forma dinámica a la evolución económica de la República.

Con respecto a las contradicciones del radicalismo en el sentido de si debía o no apoyar este proyecto, es un punto que ya aclaramos cuando el tema fue tratado en los últimos días de octubre del año pasado. Nuestro partido acepta en realidad con valentía apoyar esta ley, precisamente, por los aspectos que ya señalamos. Es decir, que debemos darle la oportunidad a todos los argentinos de que regularicen sus patrimonios.

Por eso, señor presidente, propusimos algunas modificaciones a este proyecto en cuanto a su estructuración propia y a su relación con las otras leyes impositivas de la República; algunas fueron aceptadas por Diputados y otras no; resultaron opinables según el punto de vista de cada uno.

Justamente, de la lectura del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados surgen las distintas opiniones de los diversos sectores por la que se apoya un criterio determinado.

En consecuencia, consideramos que siendo estas cuestiones opinables y por no tergiversar la orientación del proyecto pueden ser aceptadas.

Han sido modificados tres aspectos fundamentales. Por un lado, el que particularizó el señor senador Murguía respecto de las inversiones inducidas. Nosotros adoptamos el criterio de aceptar la modificación tal cual viene de Diputados como consecuencia de que de ninguna manera se elimina la perspectiva de la inversión y de la reactivación, sobre todo cuando se ha bajado la escala —lo que también es opinable— y ante la situación de que vivimos en una economía en la que apenas existe una mayor liquidez se produce un aumento de los precios, que es lo que ocurrió durante el mes de enero como consecuencia de la mayor liquidez producida por el aumento de los ingresos de la población al abonarse el cincuenta por ciento del aguinaldo.

Ante estas características se puede suponer que una mayor avalancha de capitales podría alterar la estabilidad de la economía, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de inversión en bonos públicos y privados que se han desarrollado y en las que pueden participar inversionistas nacionales o no a través de la Bolsa.

Por ello, señor presidente, entiendo que si con las modificaciones que no nos han sido acepta-

das se guarda la suficiente congruencia en el proyecto y si se ha aprobado lo que consideramos que es fundamental y que he enfatizado a través de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es decir a través de mi gestión directa, que fue oportunamente comprendido por todos los señores legisladores, entiendo que podemos dar nuestra aprobación a este proyecto tal cual viene de la Cámara de Diputados con absoluta tranquilidad intelectual.

Sr. Rubeo. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Trilla. — No es una interrupción. Acabo de terminar con mi exposición.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Usted se refirió, señor senador, a la ley de facto 22.916, que establece la coparticipación en un 45 por ciento para las provincias...

Sr. Trilla. — Eso lo trataremos luego.

Sr. Rubeo. — Pero, a efectos de un rigorismo histórico debo decir que la provincia de Santa Fe nunca logró cobrar dicha coparticipación; que en este momento, por las inundaciones que cubren la provincia, ya ha llegado a una cifra superior a los cuarenta millones de australes. Según se nos ha informado hoy a los señores senadores de nuestra provincia, el señor gobernador va a demandar a la Nación por incumplimiento de esta ley.

Sr. Trilla. — Eso lo trataremos después, señor senador.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: la posición que adoptamos en este tema ha sido profundamente explicada.

Cuando se trató en revisión el proyecto venido de Diputados tuvimos unanimidad de criterios para proponer las modificaciones que se sometieron luego a la consideración de esa Cámara, que aceptó algunas de ellas y rechazó otras.

El señor senador Murguía, con un razonamiento simple pero efectivo, señaló que si nosotros insistimos en la votación anterior, Diputados tendrá que aceptar las modificaciones que a conciencia, por convicción de este cuerpo y en forma unánime, habíamos establecido en el momento de su tratamiento.

No vamos a discutir ahora las manifestaciones formuladas por el señor senador Trilla acerca de la evolución económica del país. El ha mencionado la opinión pública general y cada uno

tiene su manera de apreciarla; pero según los datos que nosotros hemos recogido la opinión pública nacional está totalmente descontenta con el desenvolvimiento de la economía argentina.

Vamos a esperar las medidas legislativas anunciadas por el Poder Ejecutivo que propondrá con el objeto de remediar la decadente situación en que se encuentra el plan austral. Entonces, discutiremos en extensión y profundidad este tema. Interin, como el bloque radical ha manifestado que aceptará el pronunciamiento de Diputados, nosotros pediremos a los señores senadores de los bloques provinciales que nos acompañen para obtener los dos tercios en la insistencia de las modificaciones que habíamos introducido.

No es mi estilo —y lo sabe el Senado—, pero quiero hacer una alusión personal relacionada con la posición del señor senador Leconte para destacar que participo personalmente de cuanto ha dicho. Sin embargo, por una cuestión de técnica legislativa, en este momento es necesario que votemos para procurar los dos tercios requeridos para la insistencia en las modificaciones.

Por eso, señor presidente, solicito que se llame a los señores senadores antes de realizar la votación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Salim. — Señor presidente: creo que debemos diferenciar muy bien que en el país hay evasores que voluntaria y conscientemente no pagan porque no quieren y, por otro lado, hay otros que son evasores involuntarios ya que su situación económica no les permite hacer frente a las obligaciones impositivas.

Hoy nos volvemos a reunir nuevamente para tratar esta llamada ley de blanqueo. Lamentablemente, la Honorable Cámara de Diputados no supo interpretar el espíritu de las modificaciones que introdujera en su oportunidad esta Cámara. Y digo lamentablemente porque nos hallamos ahora sólo con elementos que permitirán recaudar para cubrir en mínima parte el déficit fiscal en el que nos encontramos sumergidos desde hace varios años.

Toda ley de blanqueo sirve para incluir en un mismo concepto a los contribuyentes honestos y a los evasores. No obstante, entendimos que era conveniente la sanción de una ley de este tipo para ordenar y tratar de despertar una mayor conciencia tributaria.

También debe quedar bien en claro que esta norma la queríamos para todos nuestros empresarios y contribuyentes que han prestado y pres-

tan un real servicio a la Nación y no para que regularicen su situación aquellos que con sus ilícitos han destruido al Estado, al fisco nacional y que, además, nos han endeudado de tal manera que esta carga deberá ser soportada por los argentinos durante varias décadas, con el constante y gran sacrificio de la única víctima directa: el pueblo trabajador.

El proyecto que sancionara esta Cámara el año pasado, cuenta con elementos que ligan el objetivo de la recaudación con el de la reactivación de nuestra economía, única forma de salir del caos que nos legaron y en el que se nos sigue sumiendo.

Todos conocemos que el problema central económico de nuestro país se resume en la acumulación, el ahorro, la aplicación y el desarrollo del capital.

El objetivo generalizado de esta Cámara al incorporar el capítulo quinto proyectado por el señor senador Gómez Centurión en la oportunidad de la sanción de este proyecto, se visualiza claramente en el título del mismo: "Exteriorización de capitales con destino a la reactivación del aparato productivo nacional". O sea que quienes inviertan y desarrollen procesos de inversión en nuestro país paguen menos impuestos; es decir, no se trata sólo de recaudar sino también de hallar una solución real y concreta a algunos de los tantos problemas que paulatinamente van subdesarrollando cada vez más a la Nación.

Nuestra inversión se encuentra en un nivel cero; el ahorro global como base del proceso de acumulación del capital está comprometido por las exigencias de las obligaciones externas; las evasiones generan cada día una creciente economía negra —reconocida oficialmente por el gobierno—, y el flujo internacional negativo de los capitales hacen que nos encontremos en una situación de cada vez más estancamiento económico; injusticia social y subordinación a intereses económicos no nacionales.

Señor presidente: hoy nos encontramos con que el plan austral se ha deteriorado, hay un nuevo rebrote inflacionario, tenemos mayor recesión, continúa la desocupación y el clima de inestabilidad social se incrementa diariamente.

El proyecto de este cuerpo, compartido por el oficialismo y la oposición, nos vuelve hoy de la Honorable Cámara de Diputados sin las modificaciones que le introdujéramos, las cuales en parte podrían permitirnos reactivar nuestra economía.

Espero, no obstante, que si la aprobación de este proyecto sirve para superar los grandes pro-

blemas que nos afectan, el pronunciamiento de esta Cámara ayude a la solución de los mismos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: como entiendo que el debate está concluido —además, el tema ya fue tratado durante el pasado año—, corresponde poner a votación la propuesta del senador Martiarena referida a la insistencia en la anterior sanción del Senado. Desde luego, afirmo una vez más que la bancada radical no apoyará tal tesis.

Sr. Presidente. — Corresponde en consecuencia votar si el Honorable Senado insiste en su anterior sanción. Se requieren los dos tercios del total de los miembros de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Nacional.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — De acuerdo con lo que prescribe el artículo 71 de la Constitución Nacional, queda definitivamente sancionado el proyecto de ley con la redacción aprobada por la Honorable Cámara de Diputados. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Sr. León. — Pido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Deseo aclarar que en oportunidad de la consideración anterior del proyecto de ley de blanqueo mi voto fue por la negativa, basado en razones de ética. Hoy mi actitud es en ese mismo sentido.

Sr. Presidente. — Queda constancia, señor senador.

6

IMPUESTO SOBRE LOS DEBITOS EN CUENTA CORRIENTE

Sr. Presidente. — Ha quedado reservado el proyecto de ley en revisión sobre prórroga de la vigencia de la disposición de facto 22.947 y sus modificatorias, de impuesto sobre los débitos en cuentas corrientes de entidades financieras.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por la Capital.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.